

Concepción, 14 DIC. 2016

Resolución Exenta N° 484 /

VISTOS:

1. Lo dispuesto en los artículos 7 y 49 de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública;
2. El Reglamento sobre Licitaciones y Prestación de Defensa Penal Pública, aprobado por Decreto Supremo 495 de 2002 del Ministerio de Justicia;
3. La Resolución N° 162 de 2015 que Aprueba Bases Administrativas y Técnicas de Licitación de Defensa Penal Pública;
4. El Oficio DN N° 805 de 07 de diciembre de 2016 que aprueba nómina de abogados para suscripción de un convenio directo;
5. La Resolución N° 66 dictada por el Defensor Nacional el 19 de Abril de 2012, que nombra al suscrito como Defensor Regional de la Región del Biobío;
6. La Resolución Exenta N° 300 del Defensor Nacional de fecha 25 de agosto de 2016, que delega en los Defensores Regionales la facultad de suscribir los convenios directos que se celebren al amparo del artículo 49 de la Ley 19.718 y de dictar y suscribir los actos administrativos que sean necesarios para su total tramitación.
7. La resolución N° 1600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 49 de la Ley 19.718, confiere al Defensor Nacional la facultad para celebrar convenios directos, por un plazo fijo, con abogados o personas jurídicas públicas o privadas que se encuentren en condiciones de asumir la defensa penal de los imputados y acusados;
2. La necesidad de cobertura del servicio de defensa penal pública mientras concluye el 20° Proceso Licitatorio asociado a la Zona 09 y la aprobación mediante Oficio N° 805 de 07 de diciembre de 2016 del Defensor Nacional de la suscripción de convenios directos en consideración a los planteamientos efectuados por la Defensoría Regional.
3. Que en mérito de lo expuesto, resulta procedente aprobar por el respectivo acto administrativo, el convenio directo suscrito entre la Defensoría Penal Pública y la abogada Grace Andrea Méndez Montes, cuya finalidad será garantizar una adecuada y oportuna cobertura de la prestación de defensa penal pública en la Zona 09, hasta que se resuelva el proceso de licitación.

RESUELVO:

1° APRUÉBASE el Convenio directo para prestación de defensa Penal Pública en la Zona 09 de la Región del Biobío, de fecha 28 de octubre de 2016, celebrado

con la abogada **Grace Andrea Méndez Montes**, cuyo texto se reproduce a continuación:

En Concepción a veintiocho de octubre de 2016, entre la **DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA**, RUT 61.941.900-6, representada por el Defensor Regional del Bío-bío, don **OSVALDO RODRIGO PIZARRO QUEZADA**, abogado, RUTN Nº 12.883.846-5, ambos domiciliados en Avenida Juan Bosco 2038 de la ciudad de Concepción, en adelante también denominada "la Defensoría" y doña **GRACE ANDREA MENDEZ MONTES**, abogada, Fundación, Los Angeles, en adelante también "la prestadora" o "el prestador", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

Que el artículo 49, de la Ley Nº 19.718, confiere al Defensor Nacional la facultad para celebrar convenios directos, por un plazo fijo, con abogados o personas jurídicas o privadas que se encuentren en condiciones de asumir la defensa penal de los imputados, hasta que se resuelva la nueva licitación.

Que se encuentra pendiente el 20º Proceso Licitatorio de Defensa Penal Pública en la Zona 09 de la Región del Bío-bío, por lo que resulta necesario impetrar las medidas para garantizar una adecuada y oportuna cobertura de la prestación de defensa en la zona, ante el término del contrato licitado y mientras concluye el referido proceso.

Que mediante Oficio Nº 552 de 08 de agosto de 2016 del Defensor Nacional se autorizó nómima de prestadores para suscripción de convenio directo. En tal sentido, entendiéndose que la prestadora cumple con las exigencias para realizar y desarrollar servicios de defensa penal, es procedente la celebración del presente convenio directo con la Administración para cumplir el servicio de prestación de defensa penal en las condiciones que se pactan y bajo las normas legales y reglamentarias pertinentes.

SEGUNDO: DISPOSICIONES APLICABLES Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Formarán parte del contrato, las Bases Administrativas Generales, en adelante BAG o las bases, aprobadas mediante Resolución Afecta Nº 162, de 2015 y sus respectivas modificaciones de la Defensoría Nacional, en lo que sean aplicables; documentos que se dan expresamente por reproducidos e integrados al texto de este convenio, y asimismo aceptado por las partes.

Además, serán aplicables a este convenio y a la ejecución de sus prestaciones y obligaciones, todas las normas de la Ley Nº 19.718; del Reglamento de Licitaciones y Prestación de Defensa Penal, aprobado por Decreto Supremo Nº 495, de 2002, del Ministerio de Justicia, en adelante el Reglamento; de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el decreto supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, y sus posteriores modificaciones; del Código Procesal Penal; las disposiciones relativas a derechos y garantías del imputado contenidas en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile.

Especialmente la prestación de la Defensa deberá sujetarse a los estándares básicos para el ejercicio de la defensa penal pública, aprobados por el Defensor Nacional, conocidos y aceptados por el prestador.

TERCERO: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto será la prestación de defensa penal pública, de acuerdo con las disposiciones y documentos antes señalados, y conforme a las prácticas y normas que regulan la actividad profesional de los abogados.

Constituye defensa penal pública aquella que se proporciona conforme a la Ley Nº 19.718, a los imputados o acusados según el Código Procesal Penal por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.

Para estos efectos, se entenderá por prestación de servicio de defensa penal pública el conjunto de acciones, judiciales y extrajudiciales, que el defensor penal público debe realizar durante todas las etapas de persecución penal dirigida en contra del imputado y, en su caso, hasta la completa ejecución de la sentencia, destinadas a resguardar los intereses, garantías y derechos del mismo.

Se comprenden también en la prestación de defensa, la disponibilidad de la defensora para realizar las tareas que Defensor Local Jefe o el Defensor Regional respectivo le encomiende en relación a turnos, cobertura u otras similares.

CUARTO: NÓMINA DE ABOGADOS

La defensa será ejercida por la siguiente abogada, que se denominará defensora penal pública:

- **GRACE ANDREA MENDEZ MONTES**, RUT 14.376.021-9, con oficina en Valdivia N° 300 Oficina 1004, Edificio Plaza Fundación, Los Ángeles.

Con la profesional antes señalada, y los de otros contratos adjudicados en la misma zona, si los hubiere, la Defensoría Regional elaborará una nómina de abogados que deban asumir la defensa de los imputados o acusados en la localidad respectiva. Esta nómina será actualizada periódicamente por la Defensoría Regional correspondiente y será remitida a las Defensorías Locales, Juzgados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones de la región y localidad respectiva, y otras entidades que se estimen necesarias para la adecuada prestación de defensa.

La elaboración y actualización de la nómina, así como la designación de los abogados en las causas se realizará conforme con lo dispuesto en el punto 7.10 de las bases, y las disposiciones pertinentes de la ley 19.718.

Designada, la defensora penal pública no podrá excusarse de asumir la representación del imputado o acusado.

QUINTO: ZONA DE LA PRESTACIÓN DE DEFENSA

La zona donde será ejercida la defensa comprende:

- a) Juzgado de Garantía de Los Ángeles
- b) Juzgado de Garantía de Nacimiento
- c) Juzgado de Garantía de Mulchén
- d) Juzgado de Garantía de Santa Bárbara
- e) Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles

Asimismo, se comprenden las gestiones ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, en su caso.

Sin perjuicio de lo anterior, y existiendo acuerdo entre las partes, la prestadora podrá asumir causas generadas en otras jurisdicciones de la región, cuando las necesidades del servicio de prestación de defensa así lo exijan, circunstancia que será calificada por el Defensor Regional a propuesta del Defensor Local Jefe respectivo.

SEXTO: CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE DEFENSA

Las tareas serán desarrolladas de acuerdo a todo lo señalado en el Anexo N° 1 de este convenio, denominado Propuesta Técnica para Convenio Directo, que la prestadora presentó a esta Defensoría documento que forma parte integrante de este contrato, sin necesidad de ser reproducido íntegramente, por ser conocido por ambas partes. Para ello, se efectúa expresa remisión a la propuesta de la Prestadora, y, como se ha pactado precedentemente, se entienden todas ellas integradas al texto de este contrato.

SEPTIMO: NÚMERO DE CAUSAS

La defensa se efectuará por las causas que corresponda asumir a la prestadora durante el período de su convenio.

Asimismo, la abogada deberá estar disponible para efectuar labores que el Defensor Local Jefe o el Defensor Regional respectivo le encomiende en relación a turnos, cobertura u otras similares.

OCTAVO: DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2017.

No obstante lo indicado precedentemente la vigencia del presente convenio directo de prestación de defensa penal pública no podrá, bajo ningún respecto, exceder de seis meses contados desde la fecha de entrada en vigencia del mismo, conforme el párrafo siguiente.

Por razones de buen servicio, específicamente para mantener la necesaria y adecuada cobertura de defensa penal pública en la Región, la ejecución de la prestación de defensa penal pública, objeto del presente convenio se iniciará el día 01 de noviembre de 2016, sin perjuicio de la posterior resolución aprobatoria.

Todos los gastos que irrogue la suscripción del presente convenio, e impuestos que sean pertinentes en su caso, serán de cargo del prestador.

NOVENO: OBLIGACIONES ESENCIALES

a)

defensa penal

Obligación de prestar

La prestación de defensa penal, definida como la obligación de cumplir con todas las funciones inherentes al rol de un defensor penal público, entendiéndose por esta el conjunto de acciones judiciales y extrajudiciales que personalmente el abogado debe realizar, cumplir y ejecutar de manera diligente y oportuna en todas las causas que le fueren asignadas como defensor titular o delegado, durante todas las etapas de persecución penal y hasta la completa ejecución de la sentencia, deberá ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.1 inciso segundo y 8.4.1 de las Bases de Licitación, y conforme lo establece la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal, la Ley Nº19.718, el Decreto Supremo Nº 495 de 2002, del Ministerio de Justicia, los estándares básicos de defensa penal fijados por el Defensor Nacional y los instructivos generales de prestación de defensa penal.

b)

las condiciones establecidas en la propuesta

Obligación de mantener

El contratante deberá mantener durante toda la vigencia del convenio cada una de las condiciones establecidas en su propuesta, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.4.2 de las Bases Administrativas de Licitación. Si durante la ejecución del convenio, la prestadora necesita introducir cambios en la infraestructura de atención de usuarios, deberá solicitar autorización previa a la Defensoría Regional respectiva. La Defensoría Regional respectiva tendrá amplias facultades para fiscalizar el cumplimiento de estas condiciones, y para efectuar la verificación en terreno del cumplimiento de los compromisos adoptados en esta materia por la prestadora.

c)

cumplimiento de normativas laborales y previsionales

de

Los contratantes deberán dar cumplimiento a la normativa laboral y previsional, respecto del personal propuesto para el convenio, conforme lo establece el punto 8.4.3 de las Bases de Licitación. Dentro de estas obligaciones se encontrará la de cumplimiento de las condiciones de remuneración y empleo ofertadas, a que se refiere el punto 6.1.1. de las citadas Bases.

DECIMO: DE LAS OTRAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO

a)

Obligación de informar y de llevar registro completo y oportuno de causas

Sin perjuicio de la emisión de los informes regulados en el número 9.2 de las bases y del cumplimiento de los instructivos vigentes que regulan procesos que influyen en la prestación de defensa (Modelo de Operación Eficiente, MOE), los contratantes tendrán la obligación de entregar información para mantener actualizado permanentemente el

sistema informático de seguimiento de causas generado por la Defensoría Penal Pública. Lo anterior, se deberá cumplir conforme a lo establecido en el punto 8.4.4 de las Bases de Licitación respectivas.

b) preparación y capacitación permanente **Obligación de**

Los contratantes deberán asistir a las jornadas de preparación que la Defensoría Penal Pública imparta y que se consideren necesarias para el adecuado desarrollo de su cometido. Esta obligación deberá cumplirse conforme lo establecen los puntos 8.4.5 y 5, de las Bases Administrativas y Técnicas, respectivamente.

c) comparecencia y cumplimiento de instrucciones de delegación **Obligación de**

Es una obligación del convenio, la comparecencia personal del abogado contratante o integrante de la propuesta de una persona jurídica contratante, a las audiencias y demás diligencias y actuaciones que así lo requieran y en las que haya sido designado o delegado para la defensa en las respectivas causas. Lo anterior deberá ceñirse a lo dispuesto en el punto 8.4.6 de las Bases.

d) instructivos **Obligación de cumplir**

Los contratantes deberán dar estricto cumplimiento a los instructivos dictados por la Defensoría Nacional y por la Defensoría Regional respectiva, en las materias relativas al servicio de prestación de defensa penal pública y la administración y ejecución de los convenios.

e) de carpetas de causas terminadas **Obligación de entrega**

Será obligatorio para la prestadora hacer entrega oportuna, regular y periódica de las causas terminadas, observando los instructivos vigentes del Defensor Nacional sobre contenido de carpetas.

La Defensoría Regional respectiva instruirá sobre la regularidad de la entrega de carpetas y podrá fijar plazos y volúmenes de entrega de las mismas.

f) identificación en oficinas **Obligación de mantener**

En todo caso y en relación a la infraestructura, los contratantes deberán identificarse ante el público, en sus instalaciones, con un símbolo visible que los señale como prestadores de defensa penal pública, los que serán elaborados por la Institución y se les proporcionará a la "prestadora", los que deberán devolver al concluir el contrato respectivo, previo a la devolución del fondo de reserva, o en el caso de término anticipado, antes de la aprobación del informe final.

DÉCIMO PRIMERO: DE LAS INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES Y NORMAS DE AVISO DE CONFLICTOS DE INTERESES

En la prestación de defensa bajo este convenio, la prestadora y los abogados integrantes de la nómina deberán observar especialmente las reglas relativas a conflictos de interés del punto 8.3 de las Bases Administrativas. Asimismo, habrán de sujetarse a las reglas sobre calidades incompatibles y requisitos señaladas en el punto 7.3 de las Bases. En este último aspecto tendrán la obligación de informar las incompatibilidades sobrevinientes que respecto de la prestadora o los abogados integrantes de la nómina se produzcan.

Los defensores penales públicos contratados según el proceso establecido en la Ley N°19.718 deberán sujetar su actuar al principio de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO SEGUNDO: DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONVENIO

Los servicios de defensa penal pública efectuados por la prestadora serán pagados con la suma mensual de \$ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos). En dicho monto se encuentran comprendidos todos los costos, gastos e impuestos que afectaren a la cantidad pagada por la Defensoría Penal Pública.

DÉCIMO TERCERO: DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO MENSUAL

Los pagos se efectuarán mensualmente, por mes vencido. Para ello la prestadora presentará, al Defensor Regional, el estado de pago correspondiente, junto a la documentación que acredite el pago de las obligaciones laborales y previsionales, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula novena letra c) del presente instrumento y el Informe Mensual de Prestación de Defensa a que se refiere el punto 7.9.A de las Bases Administrativas y conforme al formato y contenido establecido en el Anexo 4 de las Bases.

Del monto a pagar se deducirá la cantidad que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del punto 7.9.A señalado, de acuerdo con la disponibilidad de la prestadora, en el mes anterior al mes vencido. El Defensor Nacional dictará instrucciones generales y técnicas para regular esta materia.

No procederá pago alguno si la prestadora no presenta el Informe Mensual de Prestación de Defensa en el formato, contenido y plazos señalados en las Bases Administrativas y Técnicas.

DÉCIMO CUARTO: DE LA TERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

Sin perjuicio de los casos de término anticipado regulados en los números 8.12 y 8.16, de las bases y cláusula décimo octava del presente instrumento, el convenio para prestación de defensa penal pública terminará por las siguientes causales:

- 1) Por la resolución de la Licitación en la Zona respectiva.
- 2) Cumplimiento del plazo pactado para la prestación de defensa.
- 3) Muerte o incapacidad sobreviniente del contratado, para continuar prestando los servicios de defensa penal pública, en el caso de contratados personas naturales.
- 4) Declaración de quiebra de la prestadora.
- 5) Término de la persona jurídica.

6) Renuncia del prestador al convenio. La renuncia del contrato deberá notificarse por carta certificada con una anticipación mínima de sesenta días a la fecha en que ésta se produzca. En caso contrario, la Defensoría también podrá proceder al cobro de la garantía de fiel cumplimiento.

Las causales señaladas en los números 4, 5 y 6 precedentes darán derecho a la Defensoría para el cobro de la garantía de adecuada prestación de los servicios y fiel cumplimiento de contrato a que se refiere la cláusula vigésima de este convenio. El cobro de la garantía será efectuado por la Defensoría sin forma alguna de juicio, ni requerimiento ni notificación judicial o administrativa previa de ninguna especie, circunstancia que es aceptada por la prestadora, bastando una simple notificación administrativa con posterioridad al citado cobro, sólo para efectos de conocimiento de la prestadora.

Mientras no se comuniquen a la prestadora la conformidad y aprobación con los contenidos de su informe final y con la documentación remitida a la terminación del mismo, mantendrá la responsabilidad profesional sobre las causas asignadas y que se encuentren pendientes, hasta la aprobación del informe final.

Las causas que se encuentren pendientes al término del convenio por ocurrencia de alguna de las causales de los números 1, 3 y 4 anteriores, deberán ser devueltas a la Defensoría junto a todos sus antecedentes en el plazo de 30 días de producida la causal respectiva, considerándose esta devolución como un contenido esencial del informe final. La trasgresión de esta obligación constituye falta grave. El monto de la

multa que se determine será descontado, a elección de la Defensoría, del último pago que proceda efectuar al contratado o de las garantías reguladas en el Capítulo X de estas bases.

Este convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de los contratantes en caso de manifiesto interés público; por exigirlo así la continuidad, calidad y regularidad del servicio; y, por razones de equilibrio económico financiero.

DÉCIMO QUINTO: DE LA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION

La Defensoría Penal Pública tendrá las más amplias facultades, al tenor de la ley 19.718, su reglamento y las Bases Administrativas, especialmente su capítulo IX, y demás documentos de licitación, así como el texto de este contrato, para ejercer la fiscalización, el control y evaluación de la prestación de defensa penal pública realizada bajo este contrato.

Estas tareas se ejercerán a través de:

1. Presentación de informes por el contratado;
2. Inspecciones;
3. Auditorías externas; y
4. Sistema de reclamaciones.

Para efectos de los mecanismos de control y especialmente de inspecciones y auditorías externas la prestadora deberá disponer todas las facilidades necesarias para que la Defensoría o las personas que ésta determine, lleven a cabo inspecciones y auditorías en sus dependencias, y las de los abogados que ejerzan la defensa.

Deberán, asimismo poner a disposición de la inspección las carpetas o expedientes de los casos asignados, debidamente actualizadas y completas, con todos los datos correspondientes a audiencias, diligencias y en general antecedentes de la sustanciación de cada proceso, y, deberán entregar toda la información, sobre todos los aspectos materia de su contrato, que les sea requerida por la Defensoría Nacional y Defensorías Regionales respectivas. Todo ello con el debido respeto a las normas sobre secreto profesional.

DÉCIMO SÉXTO: DEL CONTROL A TRAVÉS DE INDICADORES Y DE LA REVISIÓN GERENCIAL DE LOS CONTRATOS

La Defensoría controlará en forma continua y periódica, a través del Informe Mensual de Prestación de Defensa, el grado de normalidad de las actividades del contrato y adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los indicadores de control mostrados por la prestadora en el mes inmediatamente anterior.

INDICADORES DE CONTROL				
Nombre Indicador	Rango de Cumplimiento			Especificaciones
	No Cumple	Cumple Parcial	Cumple	
Entrevista de imputados privados de libertad Visita de Cárcel	Inferior al 75%	Inferior al 85% y superior o igual al 75%	Igual o Superior a 85%	1) Un imputado debe ser visitado con la periodicidad que señale el Instructivo del Defensor Nacional. 2) Se entenderá imputado privado de libertad al que se encuentre sujeto a privación de libertad por la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, en los recintos penitenciarios correspondientes a la región respectiva. 3) Se consideran como visitados los imputados con visita registrada a través del módulo correspondiente del SIGDP. 4) Cuando por razones derivadas del funcionamiento de los recintos penitenciarios en la zona de licitación se vuelva previsible una menor tasa de comparecencia de los imputados a las visitas periódicas de los defensores,

INDICADORES DE CONTROL

<p>el Defensor Regional podrá disponer la rebaja de la meta especificada hasta que las condiciones de funcionamiento permitan el cumplimiento correcto del Instructivo del Defensor Nacional.</p>	<p>1) No se considerarán para estos efectos las causas terminadas en primera audiencia. Se entiende por impudados terminados en primera audiencia, aquellos que tienen fecha de término el mismo día que la audiencia de formalización. 2) Se considerarán como terminados en única audiencia aquellas causas terminadas en procedimiento arrebatado y cuya audiencia se haya realizado el mismo día de la formalización o las causas que en primera audiencia hayan concluido por suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, cuya forma de término no haya sido revocada. 3) Se excluyen casos en que el juez acoge la suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 458 del CPF y no haya reapertura del procedimiento.</p>	<p>1) Se incluyen imputados con último plazo vencido en el mes e investigación abierta por al menos 1 día. 2) Se excluyen casos en que el juez acoge la suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 458 del CPF y que no tengan reapertura del procedimiento. 3) Se excluyen casos en que exista orden de detención judicial vigente y correctamente ingresada. 4) La solicitud de apercibimiento corresponde a la gestión (actuación) del defensor registrada con posterioridad al vencimiento del último plazo.</p>	<p>Menor al 35% o el valor que determine por resolución la Defensoría Regional para la zona respectiva. Inferior al 74%. Igual o superior al 84%.</p>	<p>Menor al 35% o el valor que determine por resolución la Defensoría Regional para la zona respectiva. Inferior al 74%. Igual o superior al 84%.</p>	<p>Menos de 2 días</p>	<p>Entre 2 y 3 días</p>	<p>Más de 3 días</p>	<p>Tempos de ingreso de datos al SIGDP</p>
<p>funcionamiento permitan el cumplimiento correcto del Instructivo del Defensor Nacional.</p>	<p>1) No se considerarán para estos efectos las causas terminadas en primera audiencia. Se entiende por impudados terminados en primera audiencia, aquellos que tienen fecha de término el mismo día que la audiencia de formalización. 2) Se considerarán como terminados en única audiencia aquellas causas terminadas en procedimiento arrebatado y cuya audiencia se haya realizado el mismo día de la formalización o las causas que en primera audiencia hayan concluido por suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, cuya forma de término no haya sido revocada. 3) Se excluyen casos en que el juez acoge la suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 458 del CPF y no haya reapertura del procedimiento.</p>	<p>1) Se incluyen imputados con último plazo vencido en el mes e investigación abierta por al menos 1 día. 2) Se excluyen casos en que el juez acoge la suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 458 del CPF y que no tengan reapertura del procedimiento. 3) Se excluyen casos en que exista orden de detención judicial vigente y correctamente ingresada. 4) La solicitud de apercibimiento corresponde a la gestión (actuación) del defensor registrada con posterioridad al vencimiento del último plazo.</p>	<p>Menor al 35% o el valor que determine por resolución la Defensoría Regional para la zona respectiva. Inferior al 74%. Igual o superior al 84%.</p>	<p>Menor al 35% o el valor que determine por resolución la Defensoría Regional para la zona respectiva. Inferior al 74%. Igual o superior al 84%.</p>	<p>Menos de 2 días</p>	<p>Entre 2 y 3 días</p>	<p>Más de 3 días</p>	<p>Tempos de ingreso de datos al SIGDP</p>

INDICADORES DE CONTROL				
Consistencia y Completitud del registro de Datos	Tasa de 6% de causas con errores	Más del 3% de causas con errores, y menos del 6%	Tasa de 3% de causas con errores	1) Se consideran causas con errores aquellas que no contengan la información completa respecto del imputado según la regulación de la Ficha de Primera Entrevista por el Defensor Nacional. 2) Son errores también las omisiones o falta de antecedentes de la causa, según lo dictamina el Instructivo de Contenido Mínimo de Carpeta. 3) Serán calificadas como errores, asimismo, el registro erróneo de actuaciones y gestiones, de acuerdo con lo señalado por el Instructivo de Tramitación de Procedimiento en SIGDP.
Tasa de Entrevista a Imputados	Inferior al 10% o la tasa anual que determine la Defensoría Regional para la región	Inferior al 12% y superior o igual al 10%, o la tasa de que fije anualmente la Defensoría Regional para la región respectiva	Superior o igual al 12%, o la tasa de que fije anualmente la Defensoría Regional para la región respectiva	1) Se considera la gestión Realiza_Cita del módulo de atención de público a Imputados y familiares 2) Se entenderá por causa tramitada en el mes aquella que haya tenido una audiencia en el mes con imputado presente
Producción Promedio por abogado	Menos del 90% del valor que fije trimestralmente la Defensoría Regional para la zona correspondiente.	Menos del 100% y superior o igual al 90% del valor que fije trimestralmente la Defensoría Regional para la zona correspondiente.	Igual al 100% del valor que fije trimestralmente la Defensoría Regional para la zona correspondiente.	1) La producción del periodo corresponde a la sumatoria de puntaje por gestiones de audiencia, entrevista con imputados, visita de cárcel y recursos, según Modelo de Carga de Trabajo. 2) La cantidad de abogados contratados corresponde al número total contratado proporcional al porcentaje de la demanda ofertada y el número total de abogados requeridos

En especial la Defensoría iniciará el correspondiente procedimiento de aplicación de multas si la prestadora muestra incumplimiento reiterado de los indicadores sin fundamento plausible, por dos meses consecutivos, conforme lo señala el literal A.1) del punto 9.2. de las Bases Administrativas.

Asimismo, la Defensoría Regional realizará periódicamente una "Revisión Gerencial de los Contratos", tomando en consideración los niveles de cumplimiento de los indicadores, así como otros insumos de control y evaluación de los defensores penales públicos, como las inspecciones, auditorías, y el resultado de los indicadores de pago variable. De la revisión de contratos que haga la Defensoría Regional podrán resultar instructivos generales sobre las condiciones de la prestación de defensa, o en acuerdos particulares con la prestadora, los cuales deberán ser cumplidos en los tiempos estipulados en ellos, y cuya infracción será sancionada con multa grave, según lo establece el 2.4 del numeral 8.8.A. de las Bases Administrativas.

DÉCIMO SEPTIMO: DE LAS MULTAS

Por las faltas cometidas en el cumplimiento de este contrato podrán aplicarse multas de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas, y a lo señalado en el texto de este convenio.

Las multas se aplicarán y calificarán por el Defensor Regional respectivo, mediante resolución fundada, y su aplicación será reclamable conforme con lo establecido en el punto 8.14 de las Bases Administrativas.

1.- Falta leve

Importa una sanción pecuniaria de 20 U.F., la cual se aplicará sin perjuicio de los demás casos previstos en las presentes bases.

Para estos efectos, se entenderá que el prestador ha incurrido en una falta leve, cuando infringe uno o más estándares, siempre y cuando el perjuicio causado por la falta no afecte en forma directa los intereses y garantías o derechos del o los imputados o a la Defensoría Penal Pública.

2.- Falta menos grave

Importa una sanción pecuniaria de 50 U.F., la cual se aplicará siempre y cuando el perjuicio causado a los intereses, garantías y derechos del o los imputados o de la Defensoría, fuere posible de subsanar con otras actuaciones o diligencias nuevas y posteriores. Se contemplan los siguientes casos:

- a. Se incurrirá en una falta menos grave cuando la defensa no fuere satisfactoria de acuerdo con los estándares básicos definidos por el Defensor Nacional.
- b. Cuando el prestador realice cambios de infraestructura de atención de usuarios, sin contar con la aprobación de la Defensoría Regional.
- c. Las demás que hayan sido calificadas como menos graves en las Bases Administrativas.

3.- Falta grave

Importa una sanción pecuniaria de 100 U.F., la cual se aplicará siempre y cuando el perjuicio causado a los intereses, garantías y derechos del o los imputados o de la Defensoría, no fuere posible de subsanar con otras actuaciones o diligencias nuevas o posteriores. Se contemplan los siguientes casos:

- a. Se incurrirá en una falta grave aquella cuando la defensa no fuere satisfactoria de acuerdo con los estándares básicos definidos por el Defensor Nacional.
- b. Incurrir en una reiteración de faltas menos graves. En tal caso, a partir de la tercera falta menos grave ésta se reputará como grave, a menos que hayan transcurrido doce meses desde la aplicación de la primera falta menos grave.
- c. Negativa injustificada y reiterada a proporcionar información requerida por la Defensoría o falta de otorgamiento de las facilidades necesarias para la realización de inspecciones o auditorías, de modo que obstaculice el control, evaluación o fiscalización de la prestación de defensa penal pública.
- d. Falta de cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados con la Defensoría Regional respectiva, con base en los manuales relativos a los pagos y aplicación de indicadores para éstos.
- e. Que el prestador, persona natural o defensor miembro de nómina o lista utilice para uso particular los sistemas de información de la Defensoría, incluyendo cualquier acceso a otros sistemas que posea en su calidad de defensor penal público.
- f. Realizar cambios de localización y/o realizar cambios sustanciales en la infraestructura de atención de usuarios, por parte de la prestadora sin contar con la aprobación de la Defensoría Regional
- g. Cualquier otra infracción calificada en estas bases como falta grave.

DÉCIMO OCTAVO: DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONVENIO

El presente convenio de prestación de defensa penal, podrá terminarse anticipadamente a propuesta del Defensor Regional o por mutuo acuerdo entre la Defensoría y el prestador.

a) Término anticipado con cargos a propuesta del Defensor Regional respectivo:

La terminación anticipada del presente convenio para prestación de defensa penal pública, será dispuesta por el Defensor Regional respectivo, con el visto bueno del Sr. Defensor Nacional, en los casos de incumplimiento del convenio celebrado, conforme a las causales siguientes:

1) Incurrir en tres faltas graves durante la vigencia del convenio;

2) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones esenciales del convenio establecidas en las bases o en este instrumento;

3) Infracciones a la probidad e integridad profesional con ocasión de la prestación de defensa, tales como: la adulteración o el falseamiento del contenido de actas de

audiencias, de resoluciones judiciales, de planillas de visitas de cárcel, de informes periciales; la vulneración al deber de confidencialidad o reserva de la información relativa al caso del o los imputados de los que sea defensor titular o de los que tome conocimiento por vía de delegación de gestión o audiencia; o el cobro a usuarios o familiares por los servicios de defensa penal pública contratados, debiendo sujetar su actuar al principio de probidad consagrado en el artículo 8° de nuestra Carta Fundamental;

4) Entrega por parte del contratante de antecedentes falsos durante el procedimiento de licitación;

5) No dar inicio a la ejecución del convenio por más de 30 días desde la firma del mismo, conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas;

6) La falta de comunicación oportuna de los conflictos de intereses que afecten al prestador persona natural o a uno de los abogados integrante de la nómina. Si la infracción fuese imputable a la conducta de uno o más abogados integrantes de la nómina, el Defensor Regional hará uso de la facultad de solicitar la sustitución del abogado, conforme a lo dispuesto en la materia en las Bases;

7) Hacerse cargo el prestador persona natural o defensor miembro de nómina o lista, en calidad de abogado particular, de algún caso que le hubiese correspondido conocer a cualquier abogado de la prestadora en sus gestiones relacionadas con el contrato en que preste dicho abogado el servicio de defensa penal pública. Si la infracción fuese imputable a la conducta de uno o más abogados integrantes de la nómina, el Defensor Regional hará uso de la facultad de solicitar la sustitución del abogado, contenida en las Bases;

8) La derivación, por parte del prestador persona natural o defensor miembro de nómina o lista, de sus casos a otros abogados, teniendo el profesional en ellos un interés económico o bien obteniendo por ello un beneficio directo. Si la infracción fuese imputable a la conducta de uno o más abogados integrantes de la nómina, el Defensor Regional hará uso de la facultad de solicitar la sustitución del abogado, contenida en las Bases;

9) La falta de entrega de tres informes mensuales consecutivos, o la falta de entrega de cuatro informes en los últimos doce meses.

El procedimiento de término anticipado en estos casos se sujetará a las siguientes reglas:

- El Defensor Regional hará una descripción de los hechos y de las normas incumplidas por el prestador y que constituyen la causal de terminación, cargos que le serán debidamente comunicados, otorgándosele un plazo para que formule sus descargos. Todo lo anterior será comunicando al Defensor Nacional, informando de la solicitud de término de contrato.

- Sin perjuicio de lo anterior, el Defensor Regional deberá adoptar en general todas las medidas para asegurar la calidad, cobertura y continuidad de la prestación, pudiendo, en casos calificados, suspender la entrega de causas y solicitar la devolución de carpetas de las causas actualmente vigentes.

- Conociendo de esta solicitud de término, el Defensor Nacional podrá pedir antecedentes adicionales o decretar diligencias para su acertada resolución

- El Defensor Nacional, comunicará su decisión al Defensor Regional, quien con dicho mérito dictará la resolución correspondiente.

- La resolución que disponga el término anticipado, se notificará personalmente al prestador. En caso de no hallarse en dos días distintos, se procederá a la notificación por carta certificada.

- La resolución del término anticipado del contrato, acarrea necesariamente el que se hagan efectivas las garantías de adecuada prestación de los servicios licitados y de fiel cumplimiento del contrato.

sometida a procedimientos judiciales o de otra clase relacionados con el cobro, ni pueda su pago verse condicionado a liquidación de ninguna clase. De optar por esta garantía la Defensoría deberá ser informada sobre el posible cese del pago de la prima, constituyéndose un incumplimiento del contrato.

En estas garantías deberá expresarse "Para garantizar la Adecuada Prestación de Servicios de Defensa Penal Pública y Fiel Cumplimiento del Contrato";

Esta garantía será devuelta dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del informe final del contrato, una vez realizados los descuentos que procedan en su caso, incluidos aquellos productos de obligaciones para con terceros de los cuales pudiera ser responsable la Defensoría. Tales descuentos se efectuarán por la Defensoría sin forma alguna de juicio, ni requerimiento o notificación judicial o administrativa previos de ninguna especie, circunstancia que es aceptada por la prestadora.

VIgésimo PRIMERO: PERSONERÍA

La personería de don Osvaldo Pizarro Quezada para representar a la Defensoría Penal Pública consta en Resolución Nº 66 dictada por el Defensor Nacional el 19 de abril de 2012 y en Resolución Exenta Nº 224 de fecha 14 de junio de 2016 de la Defensoría Nacional.

VIgésimo SEGUNDO: CANTIDAD DE EJEMPLARES DEL CONVENIO.

El presente convenio se firma en tres ejemplares de idéntico tenor, quedando dos en el poder de la Defensoría y uno en poder de la prestadora.

2º IMPUTESE el gasto que genere la ejecución del presente contrato, a la "Programas de licitaciones Defensa Penal Pública", del presupuesto vigente de la Defensoría Penal Pública.

3º PUBLIQUESE la presente resolución junto a todos los antecedentes que la fundamentan en el portal de transparencia activa de la defensoría penal pública.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE; POR ORDEN DEL DEFENSOR NACIONAL

OPQ/MAFF
Distribución

- Defensor Nacional
- Director Administrativo Regional
- Unidad Regional de Estudios
- Asesora Jurídica Defensoría Regional
- Unidad de Administración y Finanzas
- Informático Regional
- Grace Méndez Montes
- Oficina de Partes

OSVALDO PIZARRO QUEZADA
Defensor Regional
Defensoría Penal Pública Región del Bío-Bío

